

Sección Latinoamericana

El primer período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se celebró en Washington, D. C., el 23 de agosto de 1948. En esa oportunidad se adoptó el Estatuto de la Organización y se eligió a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El primer período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se celebró en Washington, D. C., el 23 de agosto de 1948. En esa oportunidad se adoptó el Estatuto de la Organización y se eligió a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El primer período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se celebró en Washington, D. C., el 23 de agosto de 1948. En esa oportunidad se adoptó el Estatuto de la Organización y se eligió a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El primer período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se celebró en Washington, D. C., el 23 de agosto de 1948. En esa oportunidad se adoptó el Estatuto de la Organización y se eligió a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El primer período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se celebró en Washington, D. C., el 23 de agosto de 1948. En esa oportunidad se adoptó el Estatuto de la Organización y se eligió a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ASUNTOS GENERALES

OEA: IV Asamblea General

En la ciudad estadounidense de Atlanta, del 19 de abril al 1 de mayo últimos, se realizó el IV Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Días antes

se habían reunido los cancilleres del continente en la ciudad de Washington.¹ En la Asamblea de la OEA se plantearon algunos problemas del sistema interamericano y se habló de las reformas que requiere ese organismo para adecuar su funcionamiento a los tiempos que corren. A este respecto, los representantes de los 23 países miembros escucharon el informe de una comisión especial establecida con el propósito de estudiar y proponer medidas de reestructuración. Otro asunto que se ventiló en las sesiones fue el referente a Cuba, excluida de la Organización en 1962.

Apoyado en el acuerdo fundamental

¹ Véase "Tlatelolco II", en esta misma Sección.

de la segunda Reunión de Cançilleres en Washington, de celebrar consultas con los gobiernos latinoamericanos respecto a la asistencia de Cuba, aprobada en principio, a la tercera reunión prevista para realizarse en Buenos Aires en marzo de 1975, el Ministro argentino de Relaciones Exteriores insistió en la necesidad de revisar el caso de ese país, por cuanto que "su exclusión lesiona el principio de unidad americana". Además dijo que las medidas que concretan el bloqueo económico "son anacrónicas e irreales". Se declararon explícitamente en favor de levantar las sanciones once de los 23 países participantes, los cuales confirmaron la invitación para que Cuba esté presente en Buenos Aires. Se discutió también el procedimiento adecuado para terminar el bloqueo y las otras medidas

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., sino en los casos en que así se manifieste.

contra Cuba, presentándose dos propuestas: adoptar las decisiones por simple mayoría, tesis que sustentó Trinidad y Tabago y apoyan al parecer Argentina, Jamaica, Panamá, Perú, Barbados y México; convocar al Organo de Consulta, lo cual exigiría que dos tercios de los países miembros estuviesen de acuerdo, proposición hecha por el canciller colombiano.

El representante de Trinidad y Tabago, señor Cuthbert Joseph, propuso un plan inmediato de normalización de las relaciones con Cuba en el que se prevé —aparte del voto por simple mayoría— que cada país levante las sanciones unilateralmente. A esta posición se oponen Venezuela, Costa Rica y otros países latinoamericanos, los cuales favorecen la reanudación colectiva de relaciones. En tanto, Cuba ha comenzado a participar en otros foros del continente, manteniendo su postura, manifestada reiteradamente, de falta de interés por volver a la OEA, organismo al que considera no sólo en profunda crisis, sino como una entidad en la que se manifiesta el predominio de Estados Unidos.

Por su parte, Galo Plaza, secretario general de la OEA, afirmó: “las fallas del sistema interamericano, si es que las hay, son sobre todo fallas en las relaciones entre Estados Unidos y los otros miembros que integran la Organización”. A este respecto, se plantearon críticas a los trabajos de la Comisión Especial de Estudios del Sistema Interamericano (CEESI).² Así, por ejemplo, el canciller mexicano dijo: “se ha gastado más de un millón de dólares en 8 volúmenes de actas y documentos sin lograr resultados positivos; hasta ahora, el único acuerdo que existe es el referente a que deben de algún modo modificarse las bases y la estructura de la Organización”.

El Secretario de Estado norteamericano planteó “que el nuevo diálogo no es ya una concesión por parte de Estados Unidos, sino una realidad...” Agregó que “el cambio en la política hacia América Latina se ha reflejado en la resolución de antiguas disputas con Perú, Panamá y México que han obstaculizado

el progreso de nuestro camino común”. Abogó porque se perpetúe “el espíritu de diálogo” y dijo que “Estados Unidos promete que no intentará imponer sus preferencias políticas y que no intervendrá en los asuntos internos de sus vecinos del hemisferio occidental”.

Insistió el Secretario de Estado en que es decisión de su país “hacer todo lo posible para ampliar el acceso de América Latina a los mercados norteamericanos, mantener nuestros niveles de asistencia y consultar sobre cuestiones políticas y económicas de interés común”. Repitió la tesis expuesta en Tlatelolco de que “Estados Unidos dará consideración prioritaria a la combinación de nuestra tecnología con las materias primas y el capital de los países productores de petróleo y de otros productos básicos para el mercado estadounidense”.

Con relación al organismo interamericano, el señor Kissinger declaró: “debemos modernizar la OEA para que se convierta en un instrumento más efectivo de cooperación hemisférica”, pues resulta “excesivamente rígida en sus estructuras: innecesariamente formal en sus procedimientos e insuficientemente amplia en cuanto a sus miembros”. Así, propuso que todas las reuniones de la OEA, incluso la Asamblea General, “sean menos formales, que se admitan como miembros a todas las naciones que han asistido a las recientes reuniones de cancilleres y que la OEA sea reestructurada a fin de convertirla en un instrumento efectivo para las consultas económicas”.

Empero, al discutirse en las comisiones de trabajo los problemas del funcionamiento, el representante de Estados Unidos concretó la propuesta del Departamento de Estado de la siguiente manera: que se “adopte la costumbre de que los ministros y otros delegados se reúnan a puerta cerrada, sin actos ni formalidades”; que se instaure “el diálogo informal, con lo que se pondrá fin a la rutina formal que consume tanto tiempo”.

Las reacciones de los cancilleres latinoamericanos no se hicieron esperar. Así, por ejemplo, el representante panameño, Juan Antonio Tack, expresó en una entrevista de prensa: “Kissinger mintió al afirmar que el problema de Pana-

má está resuelto... Estamos en negociaciones y eso no quiere decir que la cuestión está finalizada... Como era de esperarse, los Estados Unidos se niegan a [aceptar] las proposiciones de Panamá en lo referente al retiro de las bases militares de la Zona del Canal y también existe una seria discrepancia de opiniones en cuanto a la posición norteamericana sobre la defensa del hemisferio desde Panamá”. Agregó el señor Tack que otro punto crítico se refiere a la construcción de un nuevo canal en territorio de su país. Empero, la posición panameña, puntualizó el canciller, es la de insistir en la necesidad de reestructurar el sistema interamericano para que los miembros tengan igual poder de decisión y se termine con la idea real de que “la OEA es un instrumento de Estados Unidos para manejar a los pueblos latinoamericanos”.

Al intervenir en las sesiones de la Asamblea, el Secretario de Relaciones Exteriores de México reafirmó el concepto de pluralismo ideológico como base de la unidad latinoamericana y comentó lo expresado por el señor Kissinger en estos términos: “ha hablado de responsabilidades y obligaciones de su país y no de concesiones o dádivas”. Esa idea “México la interpreta no como una mera sustitución semántica, sino... como el cambio radical de una conducta internacional, que constituye el tránsito del intolerable paternalismo de antaño hacia un firme deseo de cooperación”.

Por su parte, el representante de Colombia acusó a Estados Unidos de negarse a aceptar un programa de cooperación comercial con Latinoamérica, afirmando que ésta sólo ha recibido “una cascada de promesas” en esa materia. Refiriéndose a las causas de la crisis de la OEA, el canciller colombiano señaló que radican en el fracaso de programas de cooperación y desarrollo como el de la Alianza para el Progreso: “Este organismo daba lugar a los debates de los 19 ministros de Finanzas de América Latina frente a un señor representante de los Estados Unidos, al cabo de los cuales se aprobaba una ponencia general sobre el desarrollo y luego los Estados Unidos decían que no estaban de acuerdo, volviéndose a iniciar todo en una nueva ciudad”.

“La ALPRO —apuntó el canciller colombiano— es realmente un cuerpo fan-

² Véase “OEA: reunión de la comisión especial encargada de estudiar las reformas”, en *Comercio Exterior*, México, agosto de 1973, pp. 774-777 y “OEA: tercer período de trabajo del CEESI”, en *Comercio Exterior*, México, diciembre de 1973, pp. 1222-1223.

tasmal: una figura de cera sobre la mesa que ni se mueve ni desaparece.” No obstante, al ser superado dicho programa, planteó su remplazo: “hay que convocar a una nueva conferencia económica interamericana que estructure un nuevo programa, revise y aproveche la experiencia de la ALPRO y le imprima un sentido dinámico y eficiente a nuestra organización”.

Perú, por labios de su representante, centró su intervención en el papel de las empresas transnacionales, que con enorme poder entorpecen la política interna de los estados, sustrayéndose a la jurisdicción de los tribunales nacionales, generando fricciones internacionales y aplicando medidas coercitivas contra los países que afectan sus intereses, con lo que violan los principios de soberanía nacional y autodeterminación. En apoyo a su denuncia, el delegado peruano citó un estudio de la Universidad de Harvard que señala entre otras cosas las siguientes:

“Los activos líquidos de las 500 empresas transnacionales más importantes con sede en Japón, Europa y Estados Unidos, se situaban en 1973 en 250 000 millones de dólares, es decir, más del triple de las reservas monetarias conjuntas de Alemania, Japón, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

“El 70% de las sucursales y filiales se ubican en los países de origen; sus ventas anuales alcanzan en la actualidad un volumen de 450 000 millones de dólares, mientras que el producto bruto del conjunto de países en desarrollo se estimaría actualmente en 350 000 millones de dólares. . . Las filiales de estas empresas en América Latina, sólo por concepto de licencias, regalías y servicios, remitieron a sus empresas matrices sumas semejantes a la mitad de todas las nuevas inversiones de esta parte del continente. . . Esta situación es producto de un control monopolista de la corriente tecnológica.”

Sostuvo el vocero peruano que en América Latina estas empresas, excluyendo las inversiones en petróleo, obtienen un promedio de 12% de recuperación anual de su capital invertido, mientras que en Europa y en Canadá logran como beneficio sólo el 8.6%. Propuso que la OEA realice un estudio sobre las operaciones y efectos de estas empresas

en Latinoamérica, iniciativa que fue aceptada por la IV Asamblea General.

Otros acuerdos aprobados en la última sesión plenaria fueron:

— Las comisiones ejecutivas de la OEA, que hasta esta Asamblea se integraban con un reducido número de miembros permanentes y rotatorios, en el futuro se formarán con todos los países miembros.

— La Comisión Especial de Estudios del Sistema Interamericano (CEESI) se reducirá a 10 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay, los cuales se reunirán nuevamente desde el mes de junio hasta el 15 de diciembre próximos, cuando entregarán su proyecto de reformas.

— El Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP), que desde 1967 estuvo formado por siete países (4 permanentes y 3 rotatorios) se amplía a los 23 países miembros de la OEA y se integrará orgánicamente al Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), con el nombre de Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo (CEPCIES). Este acuerdo ha sido comentado como “el acta de defunción de la ALPRO”.

— La OEA preparará “un estudio profundo y completo de los principales puntos de divergencia o conflicto entre América Latina y Estados Unidos, en materia económica”.

— Se encomienda a la Secretaría General estudiar las formas adecuadas en que es posible la colaboración técnica a programas de la OEA ofrecida por cuatro países socialistas: Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Unión Soviética.

— La V Asamblea General se realizará a partir del 16 de abril de 1975.

Al salir de la primera reunión privada de la IV Asamblea, el canciller mexicano, Emilio O. Rabasa, declaró: “La OEA se actualiza o desaparece.” Dijo también que en el seno de ese organismo “jamás hemos logrado grandes acuerdos”, añadiendo que las más de las veces los logros se han visto “frenados por los trámites burocráticos de la Organización”. Acaso estas palabras, como señaló un comentarista, recojan el desencanto y la actitud cada vez más crítica de mu-

chos países miembros que desearían no sólo “imprimirle un nuevo dinamismo” a la OEA, sino “crear una nueva realidad”, lograr —como dijo el argentino Alberto J. Vignes— “con hechos y acciones efectivas que desaparezcan la miseria, el desamparo, la desigual distribución de la riqueza, la anacrónica convivencia de los poderosos con los débiles en términos de sujeción y dependencia”.

Tlatelolco II

Causó sorpresa —al decir de los comentaristas— que el 9 de abril último el secretario Kissinger hubiera declarado desde México que esta segunda reunión continental de cancilleres, prevista para celebrarse en Washington, sería preparatoria de otra subsiguiente, con sede en Buenos Aires, para el otoño de este año.

Los cancilleres latinoamericanos, probablemente en su mayor parte, esperaban esta segunda ronda del diálogo iniciado en Tlatelolco el mes de febrero anterior, como una oportunidad de concretar soluciones. Se sabía que el nuevo diálogo, a orillas del Potomac, transcurriría en día y medio el 17 y el 18 de abril. Breve sería, pero bueno —y por eso dos veces bueno, como hubiera dicho Gracián— porque atarfa cabos sueltos que quedaron de la reunión de México, según las ilusiones que se abrigan.

Se efectuaron pláticas preparatorias en la capital estadounidense para coordinar los puntos de vista y unificar las peticiones de América Latina. Los cancilleres entraban y salían de las embajadas de Brasil y de Argentina; además, en el propio Departamento de Estado se realizaron cuatro reuniones. Al parecer todo mundo había olvidado que allí mismo, en Washington, existía la OEA.

Pocos días después Atlanta sería la ciudad norteamericana que recibiría a los cancilleres visitantes, para una reunión normal de la Organización de Estados Americanos.¹ Sin embargo, no todo fue amnesia, porque el canciller de Venezuela había dicho ya en relación con la OEA, que debería ser fortalecida por ser necesaria dentro del sistema inter-

¹ Véase: “OEA, IV Asamblea General”, en esta misma Sección.

americano; pero sin dejar de buscarse un nuevo sistema de relaciones entre América Latina y Estados Unidos.

En vísperas de dicho diálogo del Potomac, volvió a decir el señor Kissinger que sería hasta la tercera reunión cuando se llevaría a la práctica lo acordado en pasadas juntas; que habrían transcurrido apenas siete semanas y que, por tanto, era corto el tiempo para que se pudieran apreciar resultados.

El vocero de los cancilleres latinos, señor Alberto J. Vignes, de Argentina, estuvo de acuerdo con Kissinger en ese punto. Por otra parte, aclaró a los periodistas que le preguntaron si se había tratado lo del reingreso de Cuba al sistema continental, que había buen ambiente para que se invitara al país de Martí a la reunión de Buenos Aires, previos preparativos y consultas.

Casi a tiempo con este segundo diálogo, ya se había dado autorización a las compañías norteamericanas residentes en Argentina, para que concertaran operaciones comerciales con Cuba. Hubo antes declaraciones de autoridades argentinas y norteamericanas, disputándose el derecho de dar órdenes a esas compañías.

Sobre la base del informe de México, después de la visita reciente del canciller Rabasa a La Habana, en el sentido de que Cuba no se opondría a asistir a una reunión interamericana, fuera de la OEA, el secretario Kissinger sugirió que se formularan consultas a las naciones continentales, sobre si cada una estaría conforme con que la nación antillana asistiera a la capital de la República Argentina. Esta, como futura anfitriona de tal reunión, fue comisionada por conducto de su canciller Vignes para realizar tal auscultación. El funcionario argentino declaró que ya tiene estructurado ese plan de consultas y que probablemente llevará meses realizarlo.

Se comenta que la tarea de concertar la conferencia de Buenos Aires para 1975 será ardua, porque implica el viraje absoluto de la política norteamericana hacia Cuba, con la consiguiente revocación de las sanciones a ese país, las cuales ya tienen más de diez años de establecidas.

Ante demandas perentorias de los

cancilleres latinoamericanos al secretario Kissinger, los senadores norteamericanos Javits y MacGee —éste presidente del Subcomité para América Latina, aquél miembro del influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado— advirtieron que las presiones demasiado insistentes pueden resultar contraproducentes; que respecto a la devolución de la Zona del Canal de Panamá, no se ha dicho la última palabra por el Senado, con todo y que 35 de sus miembros hayan dado respuesta negativa a los panameños.

En el comunicado final de la segunda reunión resalta lo dicho por el Secretario de Estado norteamericano, a saber: hay interés de su Gobierno por lograr la promulgación de una ley de reforma del comercio, que conceda preferencias arancelarias generalizadas para productos latinoamericanos, así como la liberalización de su acceso al mercado estadounidense.

Según dicho comunicado, los temas que se trataron fueron como sigue: estructura del comercio internacional y sistema monetario; cooperación para el desarrollo; empresas transnacionales; solución del problema del Canal de Panamá; medidas coercitivas de carácter económico, y transferencia de tecnología. Se acordó que la próxima reunión tenga lugar en Buenos Aires, en marzo de 1975. También se decidió establecer un grupo de trabajo integrado por representantes gubernamentales de los estados participantes. Este grupo tendrá el mandato de presentar un proyecto sobre los principios de conducta que deben observar las empresas transnacionales. Además se acordó "convocar a un grupo de trabajo de representantes gubernamentales, para estudiar la posibilidad de crear un Comité sobre Ciencia y la Transferencia de Tecnología, que tenga por objetivos la equiparación de la capacidad científica con las necesidades prácticas y la superación de los obstáculos al flujo y utilización de la tecnología en el proceso de industrialización. Para este propósito, y lo antes posible, se designará y solicitará a los miembros del grupo de trabajo que presenten su informe dentro de un período no superior a los seis meses".

En fin, fueron impresionantes las declaraciones hechas por aquellos días, a propósito de la reunión, por el entonces candidato Alfonso López Michelsen y hoy Presidente Constitucional de Colom-

bia, en el sentido de que el Gobierno de Estados Unidos maneja a los países latinoamericanos con guante blanco por conducto del Departamento de Estado; con mano áspera por medio del Departamento de Comercio y con mano habilidosa y escamoteadora por medio de sus cámaras de Senadores y de Diputados que, con sus votaciones, tienen en realidad la última palabra para anular cualquier acto pro Latinoamérica del Presidente, del Secretario de Estado o de cualquier otro funcionario, o para introducir a veces enmiendas punitivas.

Reunión Latinoamericana de Población

La preocupación reciente por el crecimiento demográfico mundial y sus repercusiones en el desarrollo de la humanidad tiene conocidos antecedentes teóricos y académicos, cuyas raíces se encuentran en los economistas clásicos, particularmente en Malthus. Empero, cuando este autor se ocupó del aumento poblacional y de su relación con la producción de alimentos, la tasa anual de crecimiento demográfico apenas alcanzaba el 0,5%. En épocas más cercanas, los rápidos avances científico-técnicos han permitido que disminuya muy sensiblemente la mortalidad y aumente el promedio de vida, lo mismo que la productividad crezca y la producción se diversifique, hasta alcanzar niveles que aquellos pensadores ni siquiera llegaron a imaginar.

El debate de los últimos años se llevó a cabo al principio en cenáculos académicos, entre especialistas y técnicos; poco a poco las discusiones fueron trascendiendo hasta captar primero la atención de círculos más amplios, y de los gobiernos y los de los organismos internacionales después.

Indudablemente existen poderosas razones para preocuparse. Según los cálculos de los más destacados analistas, de continuar el crecimiento de la humanidad al ritmo actual, calculado en 1,9% al año, en los albores del siglo XXI la población mundial habrá sobrepasado los 7 000 millones de seres. No será posible atender de modo satisfactorio las necesidades de alimentación, salubridad, vivienda, educación y trabajo de la mayo-

ría de esos pobladores —según esas opiniones. A este problema —de por sí grave— se agrega que la tasa de crecimiento demográfico no tiene visos de disminuir, pese a los grandes esfuerzos realizados por algunos organismos internacionales junto con ciertos gobiernos, adoptando varias medidas que han llegado incluso a la práctica de la esterilización mediante pequeñas operaciones quirúrgicas.

Sin embargo, no han faltado severas críticas a los que sostienen esos criterios,

ya que, según dicen, en las proyecciones se han omitido otras variables, tales como el desarrollo de la ciencia y la posibilidad de transformar el régimen social que impera en la mayoría de los países, sobre todo en los subdesarrollados, lo cual permitiría aumentar más rápidamente la producción y distribuir sus frutos con más equidad. Conforme a estas opiniones, emprender el camino de los cambios estructurales es lo que resulta humano, y no las prácticas seguidas por esos organismos en colaboración con algunos gobiernos.

Por otro lado, diversos análisis del incremento poblacional demuestran que las tasas de crecimiento están asociadas al grado de desarrollo socioeconómico de cada región del planeta. Así, el aumento demográfico en las zonas desarrolladas es sensiblemente menor que en las partes pobres, por lo que de llevarse a cabo alguna política poblacional, cada región exigiría planteamientos y estrategias diferentes. Con base en estas necesidades, los gobiernos de América Latina realizaron una reunión preparatoria a la mundial de Bucarest, prevista para agos-

Amazonia: ¿infierno verde o cuerno de la abundancia?

En casi toda discusión sobre los problemas demográficos de América Latina, no falta alguien que mencione los grandes recursos intactos y las tierras vacías del continente, los cuales permitirían mantener una población mucho más vasta, con lo que se refuta la necesidad de disminuir las tasas de aumento de la población. En particular se suele hacer mención de la Amazonia, cuyos más de 5 millones de kilómetros cuadrados abarcan casi las dos quintas partes de Sudamérica, pero cuya densidad de población es escasamente de un habitante por kilómetro cuadrado.

El Brasil, dentro de cuyos límites está la mayor parte de la cuenca amazónica, ha resuelto poner a prueba ese mito, y ha lanzado un ambicioso programa para la apertura y la colonización de la selva amazónica. Se construyen actualmente dos grandes carreteras a través de la región, y se ha planeado una tercera: la Transamazónica, que comunica los puertos de João Pessoa y Recife,

en el Atlántico, con la frontera peruana; la Cuiabá-Santarem, que cruza la Transamazónica; y la Perimetral Norte, que va por el límite noroeste del Brasil a partir de la desembocadura del Amazonas; en total, 8 000 kilómetros.

Válvula de escape demográfico

Uno de los principales objetivos en el desarrollo de la cuenca amazónica es el de aliviar las desigualdades demográficas y económicas entre las diversas regiones del Brasil. La Amazonia, con el 60% del territorio brasileño, tiene tan sólo el 8% de su población y el 4% de su ingreso nacional; el nordeste, con el 15% de la superficie, tiene el 25% de la población y apenas el 13% del ingreso; y el centro-sur, con el 25% de la extensión, contiene el 67% de la población y recibe el 83% del ingreso nacional.

En los años 60 el Gobierno brasileño trató de eliminar la terrible pobreza del nordeste mediante el estímulo a las inversiones industriales. Sin embargo, "diez años de experiencia en el proceso de industrialización del nordeste han

to próximo. La organización de esta última corre a cargo de las Naciones Unidas, como parte de los trabajos para elaborar un Plan de Acción Mundial para la Población.

En efecto, el 15 de abril último, en la ciudad de San José, Costa Rica, el entonces presidente José Figueres dio comienzo a los trabajos de la Conferencia Regional Latinoamericana de Población, a la que asistieron 25 países americanos y cuatro observadores: Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Francia. Los

participantes expusieron sus puntos de vista con la mira de unificar criterios para hacer frente a la presión de los países desarrollados, que insisten en emprender programas de control natal de resultados inmediatos, en vez de estructurar políticas demográficas a largo plazo.

Según opiniones expresadas en esa reunión, los problemas más graves que conlleva el crecimiento demográfico en los países de escasos recursos que forman el llamado "Tercer Mundo" son: la

escasez de alimentos, el desempleo, la insuficiencia de recursos para atender las necesidades de la población en materia de salud, vivienda, educación y otros servicios sociales, el hacinamiento urbano por falta de desarrollo económico y social en el campo, todo lo cual se traduce en bajas tasas de crecimiento económico y en la perpetuación de la miseria de las dos terceras partes de la humanidad.

En el acto inaugural de la Conferencia, el ministro de Salubridad de Costa

demostrado que ésta es incapaz de absorber la mano de obra de la región, muy numerosa y en continuo aumento", manifestaba un estudio del Gobierno. Por ejemplo, el nordeste absorbió sólo el 11% de los nuevos empleos creados en 1968. Con una fuerza laboral que aumenta al 3.7% al año, es menester hallar soluciones nuevas.

Tradicionalmente, los migrantes del nordeste se han desplazado al centro-sur, en especial a la región Rio São Paulo. El Gobierno brasileño confía en desviar esta corriente a los sectores inhabitados de la selva amazónica. "La Transamazônica será un sendero abierto para que los habitantes del nordeste colonicen ese gran vacío demográfico y comiencen la exploración de su potencial, hasta ahora inaccesible", declaró el presidente Medici al inaugurar la construcción de la carretera en 1970. Se espera que 100 000 nororientales se hayan establecido en la nueva carretera en 1975.

La labranza en la selva

En efecto, a fines de 1972 aproximadamente 15 000 colonizadores se habían establecido a lo largo de los tramos ya concluidos en la Transamazônica. No obstante, algunos ecólogos y agrónomos temen que los esfuerzos por cultivar la Amazonia la conviertan en un desierto. Recalcan que la exuberancia aparente de la vegetación selvática se basa en un equilibrio ecológico muy delicado. La espesa selva protege el suelo del tórrido sol ecuatorial, y las raíces de los árboles, junto con la vegetación podrida, impiden la erosión del suelo a causa de las grandes lluvias, que llegan en promedio a 80 pulgadas anuales. La precipitación le ha robado ya al suelo ciertos minerales esenciales como calcio, magnesio y fósforo, y lo ha vuelto arenoso y ácido. Según el director del Instituto de Pesquisas e Experimentação Agrícola do Norte, en Belém, más del 80% de los suelos en la cuenca amazónica pueden clasificarse como "pobres". Se calcula que hoy se pierde anualmente un kilo de tierra por hectárea debido a la erosión; cuando la capa selvática se remueva para las siembras, se perderán 34 toneladas al año.

El Gobierno brasileño recalca el éxito de la colonización en la carretera Belém-Brasília, contruida en 1960. En ese sector la población saltó de 100 000 a 2 millones, y allí pacen 5 millones de cabezas de ganado. Pero las tres cuartas partes de la carretera Belém-Brasília atraviesan no la selva sino el altiplano, donde las condiciones para la agricultura son mucho más favorables. La experiencia de los colonos en la Colonia Presidente Dutra, cerca de Porto Velho, Rondônia, quizá sea más ilustrativa. Inicialmente recogieron buenas cosechas, pero a los tres años el suelo se había erosionado en forma tal que no era posible siquiera una agricultura de subsistencia. Resultados similares obtuvieron los colonos cerca de Altamira, un cruce importante en la Transamazônica. El Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal ha señalado "indicios de que ciertas áreas desmontadas de la Amazonia se están volviendo desérticas". Esta erosión no sólo vuelve infecundos los suelos, sino que también reduce la afluencia de los ríos vecinos. Un funcionario del Instituto Nacional de Reforma Agraria en la región de Río Branco previno que la deforestación ha alterado ya la temperatura del valle del río, y la ha elevado a la cifra sin precedentes de 41°C.

El Amazonas contiene casi el 15% del agua dulce del mundo, y alberga 1 500 variedades de peces. Tiene la tercera parte de la madera en el mundo, y sus selvas proveen la quinta parte del oxígeno del planeta. Recursos tan bastos y tan importantes no pueden destruirse imprudentemente.

Incluso si el Gobierno brasileño lograra sus metas más optimistas e instalara en 1980 en la Amazonia a 5 millones de colonos, esto no resolvería el problema de población en el nordeste. En 1980, el nordeste habrá aumentado en casi 10 millones su población de 1970, o sea el doble del número de colonizadores en el Amazonas. "Para el exceso de población del nordeste hay que adoptar soluciones distintas a la simple y engañosa transferencia de masas humanas...", declaraba el economista brasileño Glycon de Paiva. La Amazonia no puede ofrecer soluciones milagrosas a problemas que se originan en raíces distintas.

Rica, José Luis Orlich, afirmó que la "unidad de la familia humana" está por encima de las diferencias raciales, ideológicas, sociales y culturales, añadiendo que "todos somos responsables por todos, en el bien y en el mal".

El funcionario costarricense agregó que las políticas dirigidas a afectar el crecimiento demográfico no pueden confundirse con las destinadas a desarrollar una nación en lo social y en lo económico; por lo contrario, ambas unidas pueden "facilitar notablemente la solución de muchos problemas".

El señor Orlich hizo hincapié en la necesidad de reconocer el "derecho inquestionable de las naciones al pleno ejercicio de su soberanía en la estructuración de sus políticas, programas y actividades de población", y se refirió además a la necesidad de que las políticas demográficas respeten los valores nacionales, "dentro del marco de los principios universalmente reconocidos que definen los derechos humanos, [que] exigen el reconocimiento de la pareja humana como el centro de estas actividades".

En el mismo acto, el secretario de Gobernación y presidente del Consejo Nacional de Población de México, Mario Moya Palencia, en representación de las delegaciones latinoamericanas manifestó que la Conferencia Regional de Población "no puede ser otra cosa que una reflexiva auscultación del proceso de desarrollo de nuestros pueblos. No puede ser otra cosa que una dolorosa revisión de las condiciones de postración y marginalismo en que viven a lo largo del continente la gran mayoría de nuestros hermanos y, por ende, un análisis de los efectos de nuestras estructuras políticas y sociales sobre la satisfacción de las necesidades económicas y sobre el bienestar de las mayorías latinoamericanas".

Al analizar el problema de la llamada "explosión demográfica", el funcionario mexicano puntualizó: "El planeta Tierra, que después de 80 000 años o más de vida del *homo sapiens*, llegó a reunir, en la mitad del siglo XVII, una población de 545 millones de habitantes, sumó los primeros 1 000 millones en 1830 y los 2 000 millones en 1930. Ahora, al finalizar 1974, se superará la cifra de los 4 000 millones de seres humanos." Señala-

do, asimismo, que "ese crecimiento acelerado es un fenómeno social, no sólo una resultante biológica que baste controlar. Es esencialmente producto de condiciones materiales deprimidas, del subdesarrollo auspiciado y preservado por el sistema de las sociedades industriales y también por los elevados índices de consumo que existen en ellas."

Refiriéndose a la política demográfica que siguen los países socialistas, Moya Palencia señaló que los gobiernos "han tomado medidas activas, directas, sociales, económicas, médicas y educativas que han conducido a reducir el crecimiento de la población". Luego se refirió a las dificultades de los países subdesarrollados en estos términos: "el crecimiento poblacional es, sin duda, el centro dialéctico por excelencia de sus problemas", agregando que entre 1970 y 1980 la población activa de ellos crecerá en 226 millones de personas, de las cuales —tan sólo en América Latina— 30 millones acudirán a las bolsas de trabajo agravando los problemas de desocupación y subempleo de los países de la región, cuyos índices en la actualidad llegan a 11 y 40 por ciento de la fuerza de trabajo, respectivamente.

El representante mexicano apoyó la posición de los países latinoamericanos respecto a establecer políticas poblacionales a largo plazo, en lugar de ceder a las presiones que ejercen ciertos países desarrollados para que se dé prioridad a la reducción de la tasa anual de crecimiento demográfico. Al finalizar su discurso, hizo una breve referencia a la Ley General de Población de México, que entró en vigor en febrero último, señalando que "toda política demográfica sólo puede ser resultado de una decisión soberana de cada país".

El viernes 19 de abril concluyeron los trabajos de la Conferencia. Los participantes y los observadores coincidieron en estimar la población latinoamericana en 650 millones de habitantes en el año 2000, lo cual —dijeron— constituye un desafío al que hay que responder positivamente con el apoyo de la tecnología, la educación y la ciencia.

En el comunicado de los delegados se dice, entre otras cosas, que "Es indispensable encontrar fórmulas realistas que hagan llegar la educación y los servicios de salud a la gran mayoría de la población, así como transformar las pautas de

la vida rural, elevando la producción y el empleo en ese sector. Es necesario elaborar fórmulas para planear un crecimiento de las ciudades que sea compatible con las tasas muy elevadas de expansión urbana. Se requiere también desarrollar una política de redistribución del ingreso que, de manera sistemática, evite la marginación económica de sectores amplios de la población".

Acción conjunta de productores de café

Los nueve principales países productores de café de América Latina (Brasil, Colombia, México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá), se reunieron los días 6 y 7 de mayo en Puntarenas, Costa Rica, para examinar las medidas adecuadas para fortalecer los precios del grano y ampliar el mercado de los cafés llamados "otros suaves" que producen México y las naciones centroamericanas. El principal logro de la reunión fue el acuerdo a que llegaron México, El Salvador y Costa Rica para intervenir en el mercado mundial con objeto de sostener los precios.

El convenio, según informaciones de la prensa, consiste en lo siguiente: los tres signatarios acordaron intervenir en el mercado cafetero del exterior "de nuestro países" mediante la compra de café, en efectivo y a crédito, para fortalecer los precios. Para ello contará con el aporte económico y la asistencia técnica en cuanto a mercados, de Brasil y Colombia.

Dichas compras se realizarán conforme a un plan de intervención que se determinará según las tendencias del mercado, de acuerdo con consultas diarias de los países miembros del grupo.

Los países productores de café aprobaron la creación de la empresa Cafés Suaves Centrales, S. A., integrada por México, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, que también ofreció formar parte.

No se quiere con esto, explicó un portavoz de la reunión, crear un organismo burocrático nuevo ya que se emplearán las estructuras actuales. El acuerdo entrará en acción de inmediato y rige a

partir del 7 de mayo. Se hizo ver que ya anteriormente se ha hecho este tipo de operaciones, como sucedió el año pasado en el caso de las compras efectuadas por Brasil, Colombia, México y El Salvador en la Bolsa de Nueva York.

Se indicó, también, que "por razones obvias, no se dará a conocer el precio de compras, ventas, ni las cantidades". Además, se explicó que Honduras y Nicaragua no se han adherido al grupo porque sus representantes carecen de poderes para hacerlo, pero anunciaron que lo harían tan pronto como se eleve el acuerdo, *ad referendum*, a sus respectivos gobiernos.

En la reunión de Puntarenas no se examinó la propuesta de México para constituir una empresa multinacional, formada por ese país y los del área centroamericana, en la cual desempeña un papel importante la promesa de Brasil de aportar 100 millones de dólares como cooperación financiera.

Esta empresa, de la cual se sabrá en próximas reuniones, está prevista a mediano plazo y tiende a controlar las existencias de café. Se adelantó que posiblemente la empresa comenzará a funcionar en la próxima cosecha, ya que de la actual quedan por colocar solamente poco más de 3 millones de sacos, los cuales es factible que se vendan en los próximos cinco meses, en el transcurso de los cuales vence el presente año cafetalero.

En cuanto al bloque de países integrados en la reunión, se informó que ese agrupamiento también tiene el propósito de mantener una oferta ordenada y regulada, la cual redundará en beneficio de un alza de precios del grano.

COLOMBIA

Elecciones presidenciales

Tras una larga campaña electoral desarrollada en las condiciones de un estado de sitio que se ha prolongado por muchos años, los colombianos eligieron el 21 de abril último al candidato del Partido Liberal, Alfonso López Michelsen, como nuevo Presidente de la República, cargo que asumirá el 7 de agosto.

registraron candidatos a la presidencia, hecho nuevo en Colombia, ya que desde 1958 sólo se podía presentar un candidato conforme al llamado Pacto Nacional, suscrito en ese año por los partidos Liberal y Conservador y formalizado luego constitucionalmente. En dicho acuerdo se estableció que durante cuatro períodos presidenciales los partidos mencionados se alternarían el Poder Ejecutivo evitando el enfrentamiento, lo que además les permitiría consolidar su posición frente al movimiento campesino y popular, según afirman reputados analistas. Este compromiso originó una permanente y masiva abstención electoral que llegó hasta 70% en anteriores comicios, explicable dado que no se trataba de consultas soberanas, sino de actos rituales de legitimización de la voluntad del partido en turno. La participación en las elecciones de 1970 de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), dirigida por Rojas Pinilla, no sólo contravino las normas electorales, sino que además canalizó la oposición de vastos sectores al mencionado Pacto.

Ya antes de la última elección no existía duda de la victoria del liberalismo y las interrogantes principales se referían al grado de participación y a la fuerza de los agrupamientos inscritos. El número oficial de electores fue de 9 893 479 (véase el cuadro 1).

Aunque la abstención fue menor que en años anteriores siguió siendo alta: 54%. Los resultados muestran que el sec-

tor participante mantiene fidelidad a los partidos tradicionales formados en el siglo XIX: el Conservador (1848) y el Liberal (1849). Los especialistas explican este fenómeno como resultado de una estructura económica, sobre todo agraria, que se ha modificado muy lentamente, manteniendo una misma relación de fuerzas sociopolíticas que por medio de la represión sistemática han marginado a las masas campesinas y a los opositores urbanos.

A lo largo de la historia colombiana tres elementos han estado presentes: el latifundio, la violencia y la dependencia externa. Ellos dibujan con precisión las líneas fundamentales de la vida nacional. Así, en 1973 la participación de la agricultura en el producto interno bruto fue de 25.9%, en tanto que la de la industria fue de 20.7%. En la agricultura predomina el latifundio: el 1.2% de las propiedades controla el 44.9% del área de cultivo, mientras que el 64.1% de las propiedades tienen el 5.5% de esa área. Un millón de hombres carece de tierra o bien posee menos de una hectárea; en el 5% de la tierra, que además es la de peor calidad, se asienta el 50% de la fuerza de trabajo agrícola.

En esta estructura agraria, el café ha sido y es el principal rubro de exportación colombiana. En 1973 aún representó el 50.7% de las exportaciones totales. Junto con las ventas de algodón, azúcar y otras agrícolas, suma el 64.2% de toda la exportación colombiana.

CUADRO 1

Elecciones presidenciales en Colombia, abril de 1974*

	votos (miles)	% respecto al total de electores	% de votos
Total de electores	9 895	100	—
Votos	4 580	46	100%
Abstenciones	5 315	54	—
Partidos			
Liberal	2 535	25.6	55.4
Conservador	1 467	14.8	32.0
Alianza Nacional Popular	450	4.6	9.8
Unión Nacional de Oposición	123	1.2	2.8
Democracia Cristiana	5	—	—

* Datos correspondientes al 95% del escrutinio.

En esta ocasión cinco agrupamientos

Siguiendo las líneas de la Alianza para el Progreso, Colombia emprendió la reforma agraria fundando en 1961 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), cuyos trabajos en 13 años costaron 344 millones de dólares. De esta suma sólo el 4.7% se destinó a pagar indemnizaciones a los antiguos propietarios y el resto se empleó en obras de infraestructura agrícola, sobre todo de riego, que han contribuido a elevar la productividad y la producción del sector agrícola más dinámico, ligado a la exportación. En esos 13 años los campesinos recibieron 22 000 hectáreas, esto es, menos de 2 000 al año. En su orientación principal la reforma agraria "busca modernizar una parte del agro colombiano sin alterar el régimen de propiedad y organizar en cooperativas comunitarias a los campesinos pobres ahí donde los problemas amenazan con explotar, buscando en estos casos su organización para alcanzar la autosuficiencia", según la publicación *Analicias*.

A partir de los años 30 del siglo XIX, los grandes terratenientes que disponían de bandas armadas iniciaron las innumerables guerras civiles por el control del poder local y nacional. Especial interés tuvieron en obtener los contratos de caminos, controlar los monopolios estatales como el del alcohol, desamortizar en su provecho las tierras eclesiásticas, etc. Así, en medio de sangre y fuego, se contormaron los dos linajes políticos: liberales y conservadores, que a partir de 1930, ante la presencia de un incipiente movimiento obrero y campesino independiente, desataron una sistemática represión contra los que aspiran a la tierra. Sólo entre 1948 y 1958 "la violencia" terrateniente aniquiló a más de 200 000 personas. Al acordarse en España el Pacto Nacional, la represión se concentró en las regiones rurales, donde el movimiento campesino adoptó formas de autodefensa, estableciendo administraciones propias en las zonas de Marquetalia, Huila, El Pato, y otras: las llamadas repúblicas rojas, luego destruidas por completo. De esta forma, los grandes sectores populares fueron marginados, permaneciendo en la escena los sectores tradicionales.

Opinan los peritos que en tales condiciones de violencia institucionalizada, de permanente estado de sitio y constantes operaciones militares en las zonas campesinas, la campaña electoral no logró incorporar a la mayoría de la población, sobre todo porque las fuerzas tradiciona-

les carecen de un programa campesino y las organizaciones con planteamientos de izquierda (Unión Nacional de Oposición —UNO— y ANAPO), no pudieron romper el cerco establecido. De ahí que sus votos provengan de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En las zonas rurales bajo ocupación militar, los campesinos, igual que los grupos indígenas, no participaron en la votación.

Otro elemento notable es la disminución de los votos obtenidos por la ANAPO con relación a 1970; esto se debe en parte, según los analistas, a que dicho agrupamiento ha evolucionado a la izquierda, por lo que los grupos de origen liberal se han separado para reintegrarse al seno del liberalismo, llevándose los votos del sector agrario y urbano medio. Sin embargo, dicha evolución a la izquierda, por limitada, ha resultado insatisfactoria de acuerdo con el punto de vista de grupos populares, que abandonaron la ANAPO para formar con el Partido Comunista la Unión Nacional de Oposición (UNO). Esta se presentó a las elecciones con un programa de unidad popular, democrático y antiimperialista, lo que le atrajo el respaldo de núcleos importantes del aún escaso proletariado industrial (sólo representa el 9% de la población económicamente activa).

Para algunos analistas, las claves de la victoria de López Michelsen se encuentran en los siguientes factores: la fórmula electoral de alternarse el poder en un sistema bipartidista conducía a que los electores participantes aceptaran como lógico el ascenso del Partido Liberal; la administración conservadora se ha visto desbordada por la inflación (25% en 1973); el descontento que origina el creciente número de desocupados, calculado en 1 millón de personas en una población activa de 7 millones; el programa de Alvaro Gómez, candidato conservador, si bien fue muy moderno desde el punto de vista publicitario, no ofreció al país más que desarrollismo, y los colombianos han escuchado machaconamente esas tesis en los últimos 20 años, durante los cuales el ingreso además de ser bajo se ha concentrado y no se prevé que se redistribuirá (en 1972 el ingreso *per capita* era de sólo 359 dólares).

López Michelsen planteó un programa modernizante basado en "una política de ingresos y salarios" orientada a com-

batir la inflación, principal mal de la economía colombiana en la actual coyuntura, según los liberales. El programa persigue mantener la capacidad de compra de los salarios, para lo cual se concertará un "acuerdo nacional" entre los factores de la producción. En este proyecto, el Estado estimulará la llamada economía mixta, en la que la iniciativa privada puede desenvolverse ampliamente con el respaldo gubernamental y en la cual el capital foráneo será complementario del nacional, conforme a la Ley de Inversión Extranjera promulgada recientemente.¹ Cabe señalar que el capital externo se valuó en 1971 en 778.8 millones de dólares, equivalentes al 10% del PIB y está ubicado sobre todo en las manufacturas (373.3 millones).

Para el agro, López Michelsen sostuvo durante la campaña la necesidad de mantener las líneas principales de la reforma social agraria que el INCORA ha venido desarrollando.

La revista colombiana *Analicias* apunta: "El programa económico del Partido Liberal deja entrever la voluntad de conservar fundamentalmente la estructura económica imperante en nuestra sociedad, limándole asperezas y eliminando de ella situaciones extremas y evitando que sus rasgos fundamentales de desigualdad se agudicen." La misma publicación señala como nuevo rasgo "la ingerencia de un Estado fuerte en la economía". Y continúa: "Todo el programa de ingresos y salarios se refiere sólo al propósito de intervenir en el proceso de distribución del producto social, pero no pretende influir en los factores que en último término son determinantes de la distribución, como lo es la propiedad de los bienes productivos".

La amplia victoria del ex canciller López Michelsen, quien cuenta con una cómoda mayoría en el Parlamento, pone a prueba un neorreformismo modernizante que intenta ser una variante que salve de la crisis estructural a una economía dependiente. De acuerdo con la Constitución, López Michelsen gobernará en coalición con el Partido Conservador, distribuyendo en partes iguales los puestos de la administración, lo que sin duda limitará aún más su reducido proyecto gubernamental, según los observadores.

¹ Véase "Colombia: reglamentación a la inversión extranjera", en *Comercio Exterior*, México, enero de 1974, pp. 71-72.